

Clivajes y actores políticos en la Argentina democrática

Edgardo Mocca

Edgardo Mocca es politólogo, profesor titular en la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, Director de la revista "Umbrales de América del Sur", de análisis y debate político, columnista regular en Debate, Página 12 y Clarín.
Mail: emocca@fibertel.com.ar

resumen

Este artículo se propone una puesta en perspectiva de los veinticinco años de democracia en el país, a partir de los principios de diferenciación política que fueron sucediéndose en diferentes etapas.

Es un consenso casi generalizado la percepción de que la política argentina sufre la ausencia de un sistema de partidos que le otorgue previsibilidad y responsabilidad. Con frecuencia se plantea la necesidad de una reforma política para transformar esta situación. Sin perjuicio de la importancia que puedan adquirir los cambios en las reglas jurídicas del funcionamiento político, la perspectiva de este trabajo sitúa en el centro el concepto de clivaje político, como principio organizador del sistema político.

A pesar de la grave crisis económica mundial que pone globalmente en entredicho las certezas neoliberales, nada asegura que pueda afirmarse en el país un clivaje en torno al tipo de relaciones entre Estado y mercado y a la redistribución de la riqueza.

palabras claves

clivajes / partidos políticos / derecha / izquierda / crisis

summary

This paper aims to put into perspective the twenty five years of democracy in Argentine, starting from political differentiation principles which took place in different stages.

The perception that Argentine's politics suffers due to the absence of a party system that gives it predictiveness and responsibility is an almost generalized consensus. The need of a political reform is often stated in order to change this situation. Even though the level of importance that the changes in the legal rules of the political operation may acquire, the point of view of this work centres the concept of Political Cleavage as principle capable of organizing the political system.

In spite of the serious world economic crisis which globally questions the neoliberal certainties, nothing assures that a cleavage related to the relationships between state and market, and the redistribution of the wealth can be reinforced in the country.

keywords

cleavage / political parties / right / left / crisis

Introducción

La demanda de un sistema de partidos estable, capaz de dotar de previsibilidad a la lucha política se ha convertido poco menos que en un lugar común entre analistas y comentaristas políticos. El múltiple derrumbe de finales de 2001 afectó profundamente a los principales partidos políticos, aunque no produjo su implosión; desde entonces los partidos han cedido el centro de la escena a liderazgos fuertemente personalizados cuya fidelidad partidaria se ha vuelto débil o sencillamente se circunscribe a la funcionalidad que tal pertenencia pueda tener para su ocasional desempeño electoral.

No se trata de un fenómeno estrictamente local. En todo el mundo democrático, los partidos políticos atraviesan mutaciones que corresponden a transformaciones profundas en el terreno político, económico y cultural ocurridas en las tres últimas décadas. La erosión de las grandes identidades sociales que conllevaron los cambios en la organización de la producción, el debilitamiento de las capacidades de los Estados nacionales en el contexto de la globalización, el nuevo clima cultural signado por el individualismo y la creciente incertidumbre, el lugar social central alcanzado por los medios masivos de comunicación y, por fin, el desmoronamiento del mundo de la guerra fría con el consiguiente final de los alineamientos en torno a dos grandes polos ideológicos, constituyen el ambiente en el que se han diluido los grandes partidos de masa y se ha transformado en general el rol de los partidos en la democracia.

Desde diferentes perspectivas se ha hablado de cartelización de los partidos políticos (Mair, 1997), metamorfosis de la representación (Manin, 1992), reaparición del liderazgo carismático en los llamados “partidos personales” (Calise, 2000). En todos los casos se reconoce la existencia de una mutación de los partidos y se le asigna un carácter mundial.

En los últimos 25 años la sociedad argentina pasó de un clima de entusiasmo hacia los partidos, en el período inaugural de la reconstitución de la democracia después de la última dictadura a un estado de descontento generalizado que tuvo su pico en los agitados días de fines de 2001 y comienzos de 2002, pero que corresponde a un largo proceso que sigue desarrollándose en nuestros días. La desafección mayoritaria respecto a la práctica de los partidos políticos es paralela a la pérdida de centralidad de éstos en la escena política a manos de los gobiernos, los grupos de poder económico, los medios de comunicación y los liderazgos de opinión relativa o absolutamente autónomos de las estructuras partidarias.

El reconocimiento generalizado de esta situación, sumado al punto de vista también generalizado entre las elites y la opinión pública de que los partidos políticos son actores centrales en cualquier proceso de desarrollo político ha alentado diversas propuestas e iniciativas para revertir esta tendencia. Las más numerosas y socialmente atractivas son las que se focalizan en la llamada “reforma política” a la que, en realidad, sería más apropiado denominar “reforma jurídica de la política” puesto que se trata de propuestas de modificación legal de cuestiones nodales en la práctica política, tales como el financiamiento de los partidos, las normas de su funcionamiento interno, la capacitación de sus cuadros y los sistemas electorales,

entre otras. Nada autoriza a subestimar la importancia de tales reformas legales; de hecho algunos de estos temas están en el centro del malestar ciudadano con la política.

Este trabajo se propone otra perspectiva de análisis: la que pone en el centro no tanto las reglas de juego internas de los partidos y propias del sistema de competencia interpartidaria, sino la estructura de la diferencia política en Argentina; aquello que Lipset y Rokkan, en un trabajo seminal de la teoría de los partidos políticos llamaron “clivajes políticos” (Lipset y Rokkan, 2000). Se trata de los intereses, los valores y las pertenencias socioculturales que en la vida de una sociedad alcanzan el suficiente relieve político como para justificar el nacimiento y la consolidación de determinados partidos. El supuesto del que se parte es que la insuficiente diferenciación ideológico-política y la frustración de intentos de instalar nuevos principios para la demarcación del territorio político ha sido durante los años de la democracia uno de los obstáculos principales para el establecimiento de un sistema de partidos estable en el que cada una de las fuerzas sea identificable por sus referencias de valores y responsable por la orientación de las políticas públicas de los gobiernos que en él se apoyan. En palabras de Vicente Palermo, durante gran parte de los años de la democracia, “... los partidos no compitieron para hacer políticas diferentes, ni cooperaron para hacer políticas comunes; básicamente tendieron a competir entre sí para hacer las mismas políticas, y a obstruirse desde la oposición” (Palermo, 2002).

La perspectiva desde la que se explorará en términos necesariamente sintéticos la experiencia de los intentos de reconstrucción de identidades y conformación de nuevos clivajes en la democracia argentina postautoritaria —en la línea que postula Gerardo Aboy Carlés— será la de concebirlas como un conjunto de prácticas configuradoras de sentido, homogeneizadoras hacia el interior y diferenciadoras hacia fuera, capaces de definir la orientación de la acción política (Aboy Carlés, 2001). No se entiende, así, que los clivajes tengan una objetividad preexistente a la actividad política y que ésta se limite a reflejarlos y a proveerles representación. Como se verá, estamos hablando de discursos políticos que proponen horizontes alternativos y convocan alrededor de un principio de diferenciación central.

En un análisis sobre los sistemas de partidos políticos en América Latina, Kenneth Roberts construye una tipología basada en la estructura de clivaje que divide las adhesiones políticas en los diversos países (Roberts, 2002). Así, diferencia los sistemas de partidos de clivajes segmentados en los que el eje de la competencia corta verticalmente a las líneas de clase, de los sistemas estratificados donde el eje corta horizontalmente y separa a las elites de las clases bajas. Entre estos últimos distingue a los de base clasista de los de movilización populista. La Argentina de la segunda mitad del siglo XX pertenece claramente a este último tipo: el peronismo, aun cuando su líder y sus principales expresiones orgánicas nunca sostuvieron una ideología clasista, expresó a los sectores obreros y populares y el radicalismo, en lo fundamental, a las clases medias. La ausencia de un partido claramente expresivo de los sectores económicamente poderosos, capaz de terciar en la lucha electoral contribuyó a que estas clases recurrieran a la presión corporativa y a los golpes

militares como estrategia principal de acción política; la crónica inestabilidad de la democracia argentina entre 1930 y 1983 es tributaria, entre otros aspectos, de esa carencia en la representación.

La diferenciación política en la elección de 1983

La dictadura que gobernó al país entre 1976 y 1983 no tuvo éxito en la construcción de una fuerza política que pudiera heredarla en un contexto democrático. Los intentos de plasmar la “cría del proceso”, como se enunciaba a ese proyecto en los tiempos más promisorios del gobierno de facto, se fue deteriorando en medio de sus fracasos económicos y terminó de hundirse después del desastroso resultado de la aventura militar en Malvinas.

La campaña electoral de 1983 se desarrolló en un paisaje político partidario muy similar al que existía en la última de las etapas constitucionales anteriores al golpe de 1976: peronistas y radicales competían de modo excluyente por el triunfo. No es extraño pensar que ese incambiado esquema de competencia llevara al liderazgo justicialista a reproducir las fórmulas discursivas que lo habían guiado hasta allí invariablemente al triunfo en cada una de las muy pocas elecciones limpias realizadas en el país desde el ascenso al gobierno de Perón en 1946.

El candidato justicialista Italo Luder construyó su discurso de modo casi exclusivo en la apelación a la condición de “mayoría natural” de la política argentina. “Ya ganamos”, “volveremos”, “somos el partido más grande de occidente” eran las consignas centrales de la campaña. Se dejaba claro así que el liderazgo peronista consideraba la elección una llana continuidad de la experiencia política del país durante las anteriores cuatro décadas. Una dura conflictividad interna, la presencia central de dirigentes políticos y sindicales identificados con los peores recuerdos del gobierno de Isabel Perón y una muy escasa referencia a la experiencia dictatorial que pasaba a estar en el centro del repudio popular facilitaron la campaña del candidato radical Raúl Alfonsín.

Para el objetivo de este trabajo, lo más importante es que la estrategia discursiva de Alfonsín constituyó el primer intento de redefinición del clivaje que dividió a la sociedad argentina desde mediados del siglo pasado. La discusión sobre el significado histórico del peronismo en la historia y en la cultura política argentina dejó de ser central en el discurso alfonsinista. Perón, según esa interpretación, fue quien introdujo en la historia política del país la bandera de la justicia social; esa era una herencia que había de ser cuidada no solamente por los peronistas sino por todo el pueblo argentino. El problema, se decía, era que los partidarios de la democracia y los de la justicia social estuvieron separados desde la emergencia del peronismo y que esa división había facilitado el triunfo de quienes se oponían por igual a uno y otro objetivo. La meta era, entonces, unir esas fuerzas y la discusión se instalaba en torno a quién podía unirlos.

Alfonsín interpretó cabalmente el clima de época propio del derrumbe de la dictadura después del fracaso de Malvinas. En rigor, fue el único político de primera línea que intuyó los rumbos que tomaría lo que él mismo llamó “la posguerra”. Esa intuición hizo que fuera también el único en no participar del pseudodiálogo

celebratorio con la dirigencia política organizado por la dictadura después de la ocupación argentina del territorio isleño. Estaba claro después de la rendición de las tropas argentinas, que la recuperación de la democracia sería la clave del futuro inmediato del país. No tan fácil de percibir era, en cambio, que el significado de la demanda democrática podía ser interpretado en términos que trascendieran al fin de uno de los tantos episodios de cesarismo militar; que fuera una clave de lectura del pasado argentino y una herramienta de transformación hacia el futuro.

La situación de sus adversarios políticos, más ocupados en dirimir sus querellas internas y en marcar la cancha para los distintos actores corporativos y políticos del movimiento peronista que en garantizar un triunfo electoral que consideraban seguro, facilitó la operación discursiva. La cadena argumental alfonsinista apareció clara y convincente: las querellas internas impedían al peronismo organizar una lectura de lo que ocurrió en el país en los últimos años. No estaban en condiciones de elaborar una autocrítica por la verdadera guerra interna que sufrió el peronismo en la década del setenta y que se proyectó a un sangriento enfrentamiento armado de alcance nacional. No bastaba con denunciar y condenar a la dictadura —lo que por otra parte la dirigencia peronista claramente no hacía— sino que era necesario hurgar en las condiciones políticas que hicieron posible su emergencia.

Esas condiciones políticas no serían otras que una insuficiente valoración de la democracia y de las instituciones; una cultura, tanto en la derecha como en la izquierda, que situaba a las instituciones democráticas en el territorio de lo formal y secundario respecto de objetivos tales como el orden, el desarrollo, la justicia social o la revolución. Lo que llegaba a su fin, entonces, no era solamente una de las tantas aventuras mesiánicas de los militares argentinos. Era toda una época. Incluía los duros enfrentamientos durante el primer peronismo, las posteriores proscripciones sistemáticas a las mayorías políticas, la inestabilidad crónica, la violencia como modo de saldar querellas políticas.

El mensaje tomó forma completa y adquirió contundencia con la denuncia del llamado “pacto sindical-militar”. Muy discutido, poco comprobable pero completamente creíble en el clima político de esos días, el “pacto” jugó su papel como mito fundante de una nueva divisoria de aguas de la política argentina. Ya no sería la actitud ante el peronismo la que organizaría las posiciones políticas; su lugar lo ocuparía la definición frente a la nueva referencia de época, la democracia, y su portador político, el alfonsinismo.

Era claramente un principio de identificación y división política de extraordinaria eficacia electoral y así lo comprobaría el resultado sorprendentemente favorable al radicalismo, por primera vez en una competencia abierta con el peronismo. Pero pretendía ser algo más: un reagrupamiento de fuerzas políticas en torno a un nuevo eje de diferenciación. Y más aún, se insinuaba la gestación de una nueva identidad política, superadora de las viejas diferencias y portadora de una nueva unidad política. Era aquello que Alfonsín evocaba en sus actos de campaña y también después de su triunfo, cuando convocaba a los peronistas de Perón, los radicales de Yrigoyen, los demoprogresistas de De la Torre y los socialistas de Palacios a

una empresa común de democratización que traería aparejada la solución de los principales problemas sociales, económicos, políticos y culturales del país.

La renovación: respuesta peronista al nuevo cuadro político

El inesperado resultado electoral fue un poderoso estremecimiento para el peronismo. En la superficie se sucedían las escenas de una dura querrela interna entre los dirigentes más involucrados y comprometidos con la derrota y aquellos que pugnaban por desalojarlos de los sitios de conducción. Más en profundidad, el peronismo encaraba una discusión de corte existencial: qué había cambiado en la sociedad argentina, en su perfil productivo, en su cultura y en su lenguaje como para posibilitar una transformación tan gigantesca de su orientación política.

Con una adecuada interpretación de la época que se había abierto, los dirigentes que luego se autodenominarían “renovadores” entendieron que la discusión de ideas era el camino para la transformación del partido-movimiento y desde esa transformación encarar una recuperación del vínculo con un amplio sector de la sociedad que visiblemente le había dado la espalda. Ese “pasaje en limpio” de la historia reciente tenía múltiples dimensiones. Los cambios en la estructura económica habían modificado la configuración de clases en la que había prosperado el predominio del peronismo entre los sectores populares. La desindustrialización producida por la política económica de la dictadura había hecho descender el empleo en el sector manufacturero en un 26% entre 1976 y 1980 (Levitsky, 2003). Otras estadísticas demostraban, además la pérdida de la centralidad de los obreros industriales en el interior de las clases populares. Es decir, no se trataba solamente de que el peronismo hubiera perdido por primera vez una elección. Era para decirlo con palabras de Halperin Donghi (1994) la propia “Argentina peronista” la que estaba agonizando.

La nueva configuración social traía aparejada consigo nuevas demandas y un nuevo tipo de vínculo con la política. El peronismo no había revisado a fondo la experiencia de su último paso por el poder; sobre todo el notable nivel de violencia que había rodeado la gestión peronista después de la muerte de Perón. De alguna manera, era el propio discurso electoral del candidato triunfante el que le había dado forma a la nueva gramática con la que se expresaría en adelante la política argentina.

La cuestión no era nada sencilla para los que procuraban transformar al peronismo. Era necesaria una dura batalla política y de ideas en el interior de su propio movimiento y simultáneamente era necesario ejercer una oposición activa al gobierno radical. Este último comenzó rápidamente a percibir la complejidad que tenía la combinación entre el proceso de democratización social y la gestión de una crisis económica que el clima antiautoritario de la transición democrática había dejado en segundo plano. De manera que uno de los centros conceptuales de la querrela interna del peronismo fue justamente cómo hacer oposición. La conducción partidaria ortodoxa se inclinó a desarrollar una oposición sistemática. Ante iniciativas reformistas como la modificación de las leyes de patria potestad compartida y de igualdad de derechos entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, el proyecto

de acuerdo limitrofe con Chile con relación al Canal de Beagle, el relevo de altos mandos militares por su desacuerdo con la política de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado y la imposición de retenciones a la producción agrícola, la dirigencia ortodoxa se sumó a la resistencia conservadora (Armada, 1985). El peronismo tendía así a encuadrar perfectamente en el esquema de diferenciación oportunamente creado por Alfonsín: representaba en ese esquema la persistencia de la vieja cultura antidemocrática en lo político, conservadora en lo sociocultural y regresiva en lo económico.

El desafío para los renovadores era, entonces, el de crear otro principio de diferenciación política. Esa operación no podía realizarse con éxito si el peronismo no lograba colocarse como parte de pleno derecho de la cultura democrática argentina, tal como ésta se constituyó después de la dura experiencia autoritaria. Para hacerlo, era necesario convertir plenamente al peronismo en un partido político. Como se sabe, desde sus orígenes, el peronismo entendió al partido (Peronista y luego Justicialista) como una mera herramienta electoral al servicio de un movimiento compuesto por tres ramas –política, sindical y femenina– verticalmente conducidas por una jefatura “natural” ejercida por su fundador hasta su muerte (McGuire, 1995). La consecuencia práctica de esta modalidad organizativa era la absoluta ausencia de democracia interna, la vigencia del principio de verticalidad. El reclamo renovador por prácticas partidarias democráticas desempeñaba un doble papel estratégico: tendía a resituar al partido en la escena democrática y facilitaba la lucha por desbancar a la dirigencia ortodoxa de su sitio de conducción.

El episodio es muy interesante como ilustración práctica de la lucha política como confrontación por la conquista de la tradición y los símbolos constitutivos. Mientras los renovadores criticaban a los ortodoxos por situar al partido junto con lo más conservador de la sociedad argentina adulterando el contenido históricamente transformador del peronismo, los ortodoxos enrostraban a sus adversarios el propósito de convertir al movimiento de Perón en “un partido más”, “de saco y corbata”, “liberal” o “socialdemócrata”.

Aunque los renovadores nunca rompieron lanzas con la estructura movimientista del peronismo, estaba claro que se proponían un partido político democratizado hacia adentro y respetuoso de las reglas de la competencia pluralista. La cuestión era el modo de diferenciarse del entonces gobernante partido radical. Y la respuesta no podía sino ser tributaria de la tradición peronista y de la particular coyuntura política en la que se desarrollaba el proceso de lucha interna partidaria.

La batalla política interna quedó virtualmente decidida cuando Cafiero, quien se había presentado fuera de la estructura justicialista y a través de un frente con la Democracia Cristiana, obtuvo más votos que su archirrival ortodoxo Herminio Iglesias en las elecciones legislativas de noviembre de 1985. A partir de ese momento, y aun cuando el radicalismo había afianzado en Buenos Aires y en el conjunto del país su condición de fuerza electoralmente mayoritaria, los renovadores consideraron que había comenzado la etapa de la lucha por la recuperación de la mayoría en nombre de un justicialismo transformado. Fue así que el 31 de diciembre de ese año dieron a conocer un documento con la firma de sus tres principales

dirigentes, Antonio Cafiero, Carlos Grosso y Carlos Menem en el que explicitaban sistemáticamente los términos de la competencia política con el alfonsinismo. El núcleo argumental de ese texto giraba en torno a la concepción de la democracia que la corriente sostendría. En efecto, el documento reconocía el mérito del alfonsinismo de haber colocado la cuestión de la democracia en el centro de la escena política argentina, pero discutía lo que la teoría política llama la “definición procedimentalista” que, según el texto, era la que proponían los “teóricos del alfonsinismo”. Para los renovadores, la democracia no podía limitarse a un conjunto de reglas y procedimientos. Las libertades políticas, decían, tienen un correlato en la distribución del poder económico, social y político.

Pocos días antes, Alfonsín había pronunciado ante el plenario de delegados de la UCR, el trascendente “discurso de Parque Norte”, una pieza ideológica y programática de profundidad inusual en nuestra historia política. Allí el presidente enunció una estrategia política articulada en torno a los principios de la democracia, la ética de la solidaridad y la modernización. Interesa centralmente que el denso discurso presidencial no se limitaba –como afirmaba el posterior documento renovador peronista al que hemos hecho referencia– a postular la democracia como un conjunto de reglas de juego. Se internaba profundamente en el territorio de lo que el discurso llamaba “el proyecto de país”, alrededor del cual el radicalismo convocaba a una amplia unidad. De modo completamente claro afirmaba Alfonsín: *“Si la democracia no es capaz de amparar procesos transformadores [...] fracasará también, inevitablemente, como procedimiento, como régimen político”* (Alfonsín, 1985).

La cuestión en disputa estaba claramente más allá del texto de documentos y discursos. Se trataba ni más ni menos que de la batalla por demarcar el terreno de una disputa que ambos enunciadores intuían para el futuro próximo. El radicalismo, fortalecido por la amplia victoria obtenida en las elecciones legislativas recientes procuraba consolidar y dar un contenido doctrinario más preciso a la fórmula de diferenciación política exitosamente desarrollada desde la campaña de 1983 hasta entonces: consolidar la democracia recién recuperada sobre un pacto entre las principales fuerzas políticas y, en ese nuevo contexto institucional, trazar un rumbo de país cuyos contornos incluían transformaciones sociales, culturales y de inserción del país en el mundo. La tensión entre ambas líneas de convergencia –sobre las reglas de juego y sobre las metas sustantivas– era evidente. Mientras la primera incluía sin discusión la participación central de la oposición peronista, la segunda, que se hacía en términos más imprecisos, insinuaba lo que dio en llamarse el propósito de creación de un “tercer movimiento histórico”, superador por igual del radicalismo y del peronismo. Mientras el primer objetivo entraba enteramente en el esquema renovador de reconstrucción del peronismo, el segundo constituía una amenaza muy directa para la consecución de sus propósitos.

El documento de Parque Norte –la versión más interesante del proyecto alfonsinista– tenía en su interior un problema que no puede considerarse responsabilidad del núcleo intelectual que proveyó sus principales líneas teóricas. En los términos en los que hemos planteado el objeto de este trabajo, ese problema consistía en la

delimitación entre el “nosotros” del sujeto político que lo emitía y el “ellos” de sus adversarios reales o potenciales. Esa divisoria de aguas entre el pasado autoritario y el proyecto de reconstitución democrática de la Argentina que se situó en el centro durante la campaña electoral de 1983 ya no correspondía plenamente a la escena política en desarrollo, y mucho menos a la que se iría configurando en los meses posteriores. El cambio se debía, en gran medida, a las modificaciones en las relaciones de fuerza en el interior del peronismo. Esos cambios ya insinuaban la emergencia de un actor nuevo, la renovación peronista, que asumía como propia la agenda redemocratizadora pero que, al mismo tiempo, se proponía discutir el modo de abordarla y, sobre todo, el lugar hegemónico en su desarrollo.

Curiosamente, para la tradición de ambos partidos y más aún para la diferencia cuya oportuna puesta en escena permitió al radicalismo ganar la primera elección de la democracia, el lugar del “movimientismo” —es decir de la subalternización de los partidos políticos por un movimiento expresivo de vagas mayorías nacionales de muy distintas tradiciones político-culturales— fue ocupado por el radicalismo con su propuesta de “convergencia” alrededor de un proyecto claramente hegemónico por la fuerza gobernante.

Mientras tanto el peronismo, en su versión renovadora, proponía un esquema de orden y diferenciación política diferente: pleno acuerdo en las reglas de juego de la democracia y diferenciación en el terreno de las políticas sustantivas. El primero de los aspectos era, por lo demás, absolutamente funcional a la batalla interna que los renovadores estaban librando en el peronismo. La asunción de la democracia como contexto ineludible de la competencia política permitía deslindar clara y positivamente para ellos el terreno de disputa en el interior del justicialismo: los ortodoxos serían la variante autoritaria del peronismo, cuya derrota era necesaria para la recuperación política del partido. En la lucha política con el radicalismo, en cambio, la diferenciación estaba en la comprensión de la democracia como algo más que un sistema de reglas de juego.

En realidad, el problema de la definición de la democracia era una forma de introducir en el debate la cuestión de la orientación política de gobierno. Como hemos visto, no era cierto que el radicalismo alfonsinista se circunscribiera a una interpretación “minimalista” de la democracia. Lo que los renovadores se proponían situar en el centro era la cuestión de la distribución de la riqueza y la de la soberanía nacional en el trazado de las políticas internas como filios de la confrontación con el partido de gobierno. Por un lado, ambas cuestiones —si bien se mantenían relativamente controladas a fines del año 1985— eran las fuentes de tensiones más fácilmente previsibles para la gestión de Alfonsín. Justicia social e independencia política son, por otro lado, dos de las banderas constitutivas del peronismo y resultaban para la renovación una excelente credencial de pertenencia a esa tradición puesta sistemáticamente en duda por sus adversarios ortodoxos.

La propuesta peronista renovadora de ordenamiento del mapa político podía expresarse en términos de “democracia liberal vs. democracia social” (o “democracia con justicia social”) (Altamirano, 2004). Su pertinencia se hace más evidente en cuanto se dirige la atención al escenario de los grandes actores sociales orga-

nizados, con frecuencia olvidados a la hora de proponer grandes realineamientos políticos. Concretamente, el lugar decisivo del peronismo en el movimiento obrero y en el conjunto de los actores colectivos populares ponía del lado de los renovadores un peso decisivo en la balanza potencial de fuerzas. Que esto no era una cuestión meramente teórica lo demostró el decisivo protagonismo de la central obrera en la oposición al gobierno de Alfonsín; un protagonismo cuya necesidad quedó abiertamente planteada después del fracaso de reorganización sindical ensayado por el gobierno democrático a poco de asumir y que se expresaría de modo contundente, paralelamente al deterioro económico del país, a través de trece paros generales contra los programas implementados por el gobierno.

Con el resultado de la elección legislativa de 1987, ampliamente favorable a la oposición peronista —a esa altura ya claramente hegemonizada por su fracción renovadora— se insinuaba por primera vez la posibilidad de una alternancia pacífica y ordenada entre los dos principales partidos. En el registro de las corrientes más institucionalistas sobre los sistemas de partido, la situación tendía a un modelo considerado muy propicio para la estabilidad del sistema argentino: pocos partidos, solamente dos de ellos relevantes en cuanto a sus posibilidades de acceder al gobierno, una distancia ideológica relativamente escasa entre ellos y tendencia al ejercicio de una oposición “leal”, es decir del tipo que no apela a procedimientos reñidos con las reglas de juego para acceder al poder (Sartori, 1992). Por caminos poco previstos, de manera prematura en el tiempo y contra los propósitos de su principal enunciador desde el retorno de la democracia, el presidente Alfonsín, el tiempo de una democracia estable y un sistema de partidos maduro parecía abrirse paso en el país.

Sin embargo, con anterioridad a este episodio electoral, el clima político y social del país se había modificado, de modo negativo no solamente para el gobierno en funciones, sino, como se verá, para toda la arquitectura del sistema político según la habían concebido e impulsado radicales y renovadores del peronismo. En la Semana Santa de 1987 estalló la crisis militar latente desde el inicio de los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado en los años de la dictadura. Sería un punto de inflexión para el gobierno de Alfonsín: al poner en entredicho el ejercicio de la soberanía por el gobierno democrático inauguraría un período de marcado debilitamiento de la autoridad gubernamental, en un contexto marcado por una aguda crisis económica.

El desenlace negociado de la crisis y las concesiones realizadas por el gobierno afectaron seriamente al sector de la renovación más comprometido con la defensa de la democracia en aquellas críticas jornadas. En efecto, mientras Antonio Cafiero compartía tribunas con el presidente y suscribía el Acta de Compromiso Democrático en el que se hacía constar “el debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos del pasado”, fórmula que inspiraría la posterior sanción de la llamada “ley de obediencia debida”, otro de los principales referentes renovadores, Carlos Menem, se abstenía de apoyar la iniciativa pluripartidista e iniciaba una línea de acercamiento a los líderes militares que protagonizaron la asonada. A partir de entonces, el gobernador riojano desarrollaría

un desplazamiento político desde los postulados de la renovación peronista hacia una alianza con los sectores más conservadores del movimiento y con los tradicionales “factores de poder” en función de su proyecto presidencial. Desde 1986, por otra parte, los problemas económicos habían alcanzado una envergadura crítica. El año anterior el gobierno había lanzado un plan de estabilización, el Austral, que tuvo un breve período exitoso que fue clave en el triunfo electoral del radicalismo en 1985. Pero en los dos años siguientes, la inflación se había desbordado en el contexto de un crónico déficit fiscal y se había agudizado el conflicto distributivo. Los sucesivos planes con los que se intentó reponer el equilibrio fracasaron rápidamente. No era un estremecimiento más: era el final de un tipo de país inaugurado básicamente durante el primer peronismo, el agotamiento de lo que Cavarozzi (1997) llamó “matriz estadocéntrica” en una crisis de proporciones desconocidas que tuvo su resolución final en el otoño de 1989, en una notable sincronía con el derrumbe del sistema de países socialistas que giraba en torno a la Unión Soviética, el principio de cuyo fin ocurrió en noviembre de ese mismo año con la caída del Muro de Berlín.

Claro que el ocaso de la renovación peronista no coincide en el tiempo con la decisión de adoptar un compromiso incondicional con la defensa de la institucionalidad democrática, tomada en la Semana Santa de 1987. Más aún, pocos eran los analistas políticos que no descontaban su victoria en la elección interna —la primera del peronismo en su historia— en la que competiría con Menem, quien fue el primer dirigente peronista en proclamar su precandidatura a la presidencia de la república. Pero a partir de la crisis militar y en medio de la creciente crisis económica, el clima político en el peronismo experimentó un sensible cambio. El nuevo tiempo era más propicio para la resurrección de las tradicionales fuentes de la identidad peronista; la gravedad de la situación económica, la sensación de ausencia de un centro de autoridad política nacional y la marcada insatisfacción en amplios sectores populares con el rendimiento práctico de la democracia facilitó la puesta en escena de un liderazgo, como el de Carlos Menem, de pretensiones carismáticas, escaso compromiso con las formas democráticas y disposición a radicalizar los tintes antipolíticos de su discurso en correspondencia con el clima social de esos días.

La revista *Unidos*, la principal empresa intelectual surgida del proceso de la renovación peronista dedicó su número 19, de octubre de 1988, al análisis de la elección interna del peronismo. En una apretada y precisa síntesis del proceso político que estamos comentando, su director Carlos Chacho Álvarez afirmaba en la nota que escribió para ese número: “*Es muy difícil comprender el liderazgo de Menem divorciado del fracaso alfonsinista, de los vacíos dejados por la renovación y de la aceleración vertiginosa de la crisis*” (Álvarez, 1988). Se podría ir más lejos; esa crisis, ese fracaso y ese vacío frustraron uno de los más interesantes proyectos de reestructuración del mapa político, en términos de una bipolaridad política que, sin corresponder estrictamente al esquema derecha/izquierda que funciona en una importante cantidad de países democráticos contemporáneos, hubiera podido avanzar en una clara diferenciación identitaria, lo que, junto con el

común respeto a las reglas de juego democráticas y pluralistas hubiera fortalecido el sistema político argentino.

Menemismo, consenso neoliberal y nuevas oposiciones

El episodio de la hiperinflación constituye un punto de inflexión fundamental en la historia de estos años de democracia. En lo que se refiere a la configuración de la lucha política produjo una transformación raigal, no en el sistema de partidos, que se mantuvo intacto en lo fundamental, sino en los términos discursivos en los que se entabló.

Si la derrota de Cafiero ante Menem en la elección interna del peronismo marcó el principio del fin de la renovación, el triunfo de este último en la elección presidencial y el curso que emprendió desde el gobierno constituyó el ocaso definitivo de esta experiencia. Claro que Menem cerró el “capítulo renovador” consumando el logro de uno de los objetivos principales de aquel proyecto: la institucionalización del Partido Justicialista (Palermo y Novaro, 1997). Pero lejos estaba el líder riojano de aceptar el lugar de ese partido donde lo había colocado, según vimos, la renovación. No era el peronismo “socialdemocratizado”, integrado a una dinámica de competencia interpartidaria en la que representaría el “lado social” de la democracia, frente a la concepción liberal que se atribuía al radicalismo. Después de muchos intentos de subalternizarlo detrás de una “liga de ganadores” en los que pretendía incorporar a una vasta y variopinta de dirigentes provenientes de diferentes partidos y, sobre todo, a figuras populares ajenas a los partidos y a la vida política en general, Menem terminó apoyándose en el Partido Justicialista como una de las herramientas centrales de su proyecto. Fue exitoso en la reconversión del partido a favor de un programa de reestructuración económica y alcanzó un predominio personal incontestado en su interior. Pero el clivaje político que construyó era de una naturaleza claramente diferente al que propiciaba el proyecto renovador.

La posibilidad de ese viraje hacia el neoliberalismo, manteniendo y reforzando el control de la maquinaria justicialista solamente puede comprenderse sobre la base de apreciar en plenitud el contexto en el que tal viraje se encaró. En primer lugar, claro está, hay que situar la emergencia socioeconómica en cuyo marco asumió Menem el gobierno. Durante el año 1989, los precios minoristas en Argentina aumentaron casi 5000%; solamente en la semana del 12 al 18 de mayo (las elecciones presidenciales fueron el 14 de ese mes) el dólar se devaluó un 67% (Aboy Carlés, 2001). Semejante derrumbe se expresaría además en una grave crisis institucional: Alfonsín tuvo que entregarle anticipadamente el gobierno al ganador de las elecciones, en medio de un estallido social generalizado.

A lo largo de prácticamente toda su gestión, y particularmente desde que el dispositivo de la convertibilidad 1 a 1 entre el peso y el dólar alcanzó éxitos en el objetivo de estabilización de la economía, Menem empleó la evocación del dramático cuadro social en el que asumió la presidencia como vértice de un discurso construido en clave refundacional. Un discurso que, en la tradición histórica del peronismo, situaba a los adversarios de las políticas del gobierno, como adorado-

res del pasado y responsables directos del drama que estalló en 1989. Con diversos matices en las diferentes etapas de su gobierno, Menem recurrió al arsenal de la argumentación antipolítica: no se ubicaba como un político que disputaba con otros políticos sino como un portador carismático de soluciones que beneficiaban a “todo el pueblo”, que enfrentaba conspiraciones y sabotajes de los enemigos de ese pueblo.

La crisis hiperinflacionaria fue, como se ha dicho el instante resolutorio de un largo proceso de transformaciones sociales y culturales en el país. Algunas de esas transformaciones que confluyeron en los dramáticos días de 1989 fueron claves en la posibilidad de la emergencia de un nuevo “consenso político” alrededor del giro neoliberal menemista. Ya hemos mencionado los cambios en la estructura productiva y en la composición de los sectores populares que aparejaron una pérdida de centralidad de los trabajadores industriales. De modo paralelo a esas transformaciones estructurales, se desarrollaron cambios en el modo de configuración de la actividad de los partidos políticos, particularmente del peronismo. Según Steven Levitsky “(...)para comienzos de los años noventa, el PJ se había convertido en un partido clientelista, en el que los sindicatos desempeñaban un papel relativamente secundario” (2003). Esa transformación que venía operándose desde 1983, a favor de las posiciones estatales alcanzadas por el peronismo en gobiernos provinciales y locales, a pesar de su derrota en las presidenciales, fue parte del contexto inicial que facilitó la puesta en marcha de las reformas promercado y se vio reforzada por el éxito que esas reformas tuvieron en términos de apoyo electoral popular. Diversos sectores sindicales intentaron enfrentar lo que consideraron una traición al peronismo y en especial a las promesas realizadas en la campaña previa al triunfo, pero los éxitos electorales del peronismo reconvertido fueron aislando y neutralizando los disensos. Con el paso del tiempo, Menem logró sumar a buena parte de las primeras líneas sindicales a su política de reformas promercado a través de diversos pagos laterales, tales como la participación en los nuevos negocios provenientes del proceso privatizador.

Por otro lado, a fines de la década del ochenta, se había desarrollado con bastante profundidad lo que Manin ha llamado “la metamorfosis de la representación”, el paso de una democracia de partidos a una “democracia de audiencia”. Se trata del proceso en el que la opinión pública se convierte en un actor político central en desmedro de las maquinarias políticas, crece de modo exponencial el electorado independiente de las identidades partidarias y los medios de comunicación se convierten en la arena principal donde se construyen los liderazgos y las confrontaciones políticas. Durante la etapa anterior a la crisis hiperinflacionaria, estas nuevas configuraciones habían conformado, a su manera, un clima social y cultural transformado respecto de una tradición formada en las cinco décadas anteriores.

La hiperinflación aparecía confirmando los postulados ideológicos antiestadistas que saturaban los medios de comunicación en los últimos años anteriores. La paradoja fue que quien hizo de esos enfoques su arsenal principal durante la campaña electoral de 1989 fue el derrotado candidato radical, Eduardo Angeloz. Por su lado, el candidato Menem había hecho de la ambigüedad, cuando no de la auto-

contradicción, el estilo dominante de su mensaje como candidato. El libro “La revolución productiva” –principal documento programático de la campaña menemista– era, en lo fundamental una reedición del repertorio económico y político tradicional del peronismo; nada en su contenido adelantaba el rumbo que tomaría Menem una vez en el gobierno. Sin embargo, la magnitud y la dinámica de la crisis ponían en segundo plano las palabras y las propuestas de políticas públicas: estaba en juego la confianza que el electorado estuviera dispuesto a entregar a cada uno de los candidatos. El candidato justicialista logró aparecer ante la sociedad como el “hombre solución”. Ya en el gobierno, Menem decidió explotar al máximo el espacio de la “videopolítica”; se apoyó en los espacios y comunicadores mediáticos más comprometidos con la prédica neoliberal y ensambló su discurso con el clima antipolítico y antipartido.

El curso de las políticas adoptadas por Menem en el gobierno reestructuró de manera raigal el paisaje político argentino. La oposición radical tardó en reaccionar después del dramático final de la experiencia de gobierno alfonsinista: el propio acuerdo que permitió la entrega anticipada del gobierno establecía que los legisladores radicales no obstruirían las medidas de emergencia impulsadas por el nuevo gobierno. Algunos sindicatos, como los telefónicos y ferroviarios, plantearon una estrategia de resistencia a la política de privatizaciones puesta en marcha; pero sin respaldos de consideración en la opinión pública y, finalmente sin éxito. La única disidencia manifiesta en el Partido Justicialista se expresó a través del llamado “grupo de los ocho”, conformado por diputados que se oponían al rumbo económico y, de modo especial, a la política militar del nuevo gobierno que desembocaría, en diciembre de 1990, en la firma de los indultos para los jefes de la última dictadura militar, condenados en 1985 después de un memorable juicio. En alianza con el Partido Intransigente y el Partido Demócrata Cristiano, este sector realizó en 1991 una muy pobre elección que marcó de modo preciso los límites de los sectores progresistas escindidos del menemismo.

Fue a partir de la firma del Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín en 1994, que el campo de la oposición sufrió un cambio considerable, tanto en su composición partidaria como en los ejes discursivos en los que intentó fundarse.¹ Interpretado por vastos sectores como una renuncia de la UCR a su función opositora, el pacto facilitó el rápido crecimiento de una tercera fuerza, el Frente Grande, que ganó la elección de representantes constituyentes de abril de 1994 en la Capital Federal.

Lo que nos interesa remarcar de este cambio en el paisaje opositor a partir de ese momento es el modo con que el nuevo actor político construyó el mapa de la diferenciación política. Después de duras disputas internas, de las que resultó la escisión del grupo que encabezaba Fernando “Pino” Solanas, el Frente Grande –cuya conducción pasó a ejercer en plenitud Chacho Álvarez– profundizó un giro de su posición política que ya se había insinuado exitosamente en la campaña electoral para la elección de constituyentes: el centro de su planteo dejó de ser la impugnación del proceso de reformas promercado y se construyó alrededor de la demanda social contra la corrupción, la condena de la corrupción gubernamental y

la necesidad de atender con sensibilidad social a los vastos sectores afectados por las reformas. Curiosamente, era una fuerza de origen progresista o centroe izquierdista la que iba a dar forma a un nuevo tipo de consenso, en este caso alrededor de la estabilidad económica —excluyentemente simbolizada por la convertibilidad entre dólar y peso— y la necesidad de un proceso de modernización económica. Aunque se discutieran aspectos del plan económico, el Frente Grande —que se convertiría en Frepaso con la incorporación del diputado justicialista Bordón y la de las dos ramas en las que entonces estaba dividido el Partido Socialista— iba a sustentar una vertiginosa saga de crecimiento electoral en ese implícito compromiso con las reformas en marcha.

En las presidenciales de 1995, ese rumbo fue convalidado en el terreno electoral: la fórmula Bordón-Álvarez obtuvo el segundo puesto enviando por primera vez en la historia a la UCR al tercer lugar. Como lo hicieron alfonsinistas y renovadores durante el primer período de recuperación democrática cuando decidieron adoptar la vigencia de las instituciones democráticas como piso para la confrontación política; la estabilidad económica pareció sumarse, en los años exitosos de la convertibilidad, al patrimonio de los consensos básicos de la política argentina. El problema consistía en que la estabilización económica era el aspecto más visible —y también más atractivo— de un programa económico cuyas consecuencias en materia de desindustrialización, desocupación y marginación social no tardarían en salir a la superficie y cuyos efectos desastrosos desde el punto de vista fiscal estallarían poco tiempo después.

La línea de demarcación del territorio político impulsada por el nuevo actor político de centroe izquierda quedaba constituida, entonces, en torno de un discurso centrado en los abusos decisionistas del menemismo y en la corrupción que, a partir de una serie de escándalos, pasó a ser percibida como constitutiva de la práctica política del elenco gobernante. Las vagas apelaciones a una mejor distribución de la riqueza no alteraban el tono general del mensaje de los principales líderes, aunque en el Frepaso existieron siempre corrientes y dirigentes que ponían en la cuestión social el acento principal de su discurso. Mucho se ha discutido acerca de este desdibujamiento de las señas identitarias del progresismo que se atribuyó a los líderes principales del Frepaso. A la vista de los acontecimientos que se sucedieron en el país —particularmente el derrumbe de la convertibilidad y la drástica modificación de los enfoques políticos y económicos sobrevenida desde entonces— es lógico que circulen en ambientes académicos y políticos que se identifican con la izquierda o el progresismo críticas a la ambigüedad política del Frepaso, su tendencia a seguir los humores de la opinión pública y su incapacidad de instalar una agenda propia en materia productiva y de justicia social (Rinesi y Nardacchione, 2007).

Tales discusiones deben, sin embargo, dar cuenta de un clima de ideas que por entonces recorría el mundo y que en nuestro país tuvo una audiencia popular excepcionalmente receptiva después del incendio hiperinflacionario. Eran los años de esplendor de la “tercera vía” y otros experimentos de la izquierda europea en procura de adaptarse a cambios civilizatorios de alcance mundial. En última ins-

tancia, merece ser debatido si los clivajes políticos pueden ser invariablemente remitidos a un conjunto de valores y principios, estables y siempre iguales a sí mismos, con prescindencia de los dictados de la coyuntura política. Aunque hoy pueda ser legítimo lamentarnos del grado de mimetización que con el discurso hegemónico de aquel período tuvo la política de la centroizquierda, es necesario reconocer al mismo tiempo que en esos años hubo también quienes persistieron en la construcción de una oposición de izquierda obstinadamente ajena al clima político-cultural reinante. No los acompañó el éxito. Eso no quiere decir que no tuvieran razones, pero sí significa que fracasaron a la hora de convertir esas razones en argumentos convincentes y en acciones políticas eficaces.

El final de la experiencia de la oposición de centroizquierda es sobradamente conocido. Después de emprender una alianza con la UCR, sustentada en la lucha contra el “hegemonismo menemista”, la fuerza participa de un gobierno “de coalición” que nunca terminó de ser tal. La crisis terminal de la experiencia ocurrió con el tristemente célebre episodio de sobornos en el Senado de la Nación en procura de sancionar una ley de flexibilización laboral elaborada en absoluta sintonía con los vientos neoliberales de la época. Con la renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia, en repudio a tales prácticas gubernamentales, el deterioro del gobierno dio un salto en calidad; la crisis económica y la tozudez del presidente De la Rúa en la pretensión de salir de ella adoptando las recetas propias del pensamiento que la incubó, concluyó con la desastrosa performance electoral de la Alianza en octubre de 2001 y la renuncia del presidente en medio de un caos económico, social y político generalizado.

De todos modos, no fue necesariamente la crisis, en la magnitud que alcanzó, la única causa del fracaso del experimento del Frepaso y la Alianza. El proyecto de construir un polo político a la izquierda del peronismo, al que se consideraba definitivamente asociado a la cultura neoconservadora tenía limitaciones en su propia concepción. Sin entrar en consideraciones muy particulares que conciernen al contexto de surgimiento de la experiencia frentista, podría asegurarse que es muy problemática la afirmación de un clivaje izquierda-derecha (o centroizquierda-centroderecha) sin una mirada programática alternativa que apunte a una mayor y mejor distribución de la riqueza. A principios de la década del 80, en un artículo llamado “El capitalismo democrático”, en el que pasaban revista a la relación entre las izquierdas democráticas y la teoría económica de Keynes, Adam Przeworski y Michael Wallerstein (1984) afirmaban que “... el keynesianismo brindó de pronto a los partidos de la clase trabajadora un motivo para gobernar”. Los autores se refieren a la orfandad teórica de los partidos socialistas y socialdemócratas, después de haber renunciado al marxismo como ortodoxia y al modelo soviético como horizonte programático. Es posible que la afirmación tenga una validez más general. El extraordinario consenso ideológico neoliberal que tiene vigencia desde la década del 80 ha puesto en grave crisis al pensamiento de izquierda en todo el mundo, al restarle a los partidos de esa inspiración un potencial de proyecto alternativo dentro del capitalismo. Puede discutirse si la presente crisis trae o no la posibilidad de una innovación de la trascendencia que tuvo el keynesianismo hace

siete décadas. Pero no puede ignorarse el estado de cosas que rodeó a fines de siglo la experiencia que ahora comentamos.

La pretensión de establecer un eje de diferenciación política en torno a la ética política y al respeto por los principios republicanos de gobierno tiene, según lo demostró la experiencia de la Alianza, algunos problemas congénitos. Presupone un grado de deslegitimación política del adversario al que se considera carente de mínimos niveles de transparencia y respeto por las reglas de juego. Y, sobre todo, tiende a confluir con los sentimientos antipolíticos de naturaleza individualista e insolidaria que abundan en nuestras sociedades contemporáneas. En el caso concreto de la alianza entre radicales y frepasistas, la retórica eticista y republicana cargaba contra un gobierno que terminaba su mandato y terminó funcionando como la demanda de que se hiciera de mejor manera aquello que, según rápidamente se comprobó, había llevado al país a un marasmo.

Kirchnerismo, ¿transversalidad y concertación o aggiornamento peronista?

Así como el incendio hiperinflacionario de 1989 terminó con el proyecto de un bipartidismo renovado alrededor de la común asunción de las reglas de juego democráticas, incluida la alternancia periódica, la devastadora crisis de 2001 fue el desenlace de un fugaz proyecto de competencia bipolar, con la estabilidad económica (inseparable del programa de reformas promercado) incorporada al bagaje de acuerdos básicos.

En el contexto del caos social y económico y el aislamiento internacional del país, el sistema de partidos políticos vivió dos procesos paralelos: el de la conformación de una coalición de emergencia alrededor del gobierno de Duhalde, inédita por su amplitud y el de una extraordinaria fragmentación de ofertas políticas que desbordó largamente las fronteras de los partidos constituidos. El telón de fondo sobre el que se recortaba ese panorama era el de un rechazo generalizado, y furioso por momentos, de vastos sectores de la sociedad contra la política y los partidos, expresado a través de múltiples formas en el espacio público.

La polémica intensa y por momentos crispada entre los diversos líderes que se embarcaron en los preparativos para la elección de 2003 convivió con un innegable esfuerzo de responsabilidad política: ninguno de los actores relevantes de la política argentina de aquellos días se sumó a una aventura antisistema. La lenta recuperación económica posterior al colapso, por su lado, facilitó la creación de condiciones políticas para una salida político-institucional pacífica.

La única fuerza política que aparecía capaz de asegurar un orden y proveer aunque sea un precario nivel de gobernabilidad era el peronismo. El radicalismo prestó su colaboración a la gestión duhaldista, mientras los restos dispersos del Frepaso se dividían entre quienes decidieron apoyar la transición hacia una nueva convocatoria electoral y quienes se embarcaron en nuevas empresas políticas, particularmente el ARI de Carrió y en menor medida el incipiente lanzamiento de Néstor Kirchner como precandidato a la presidencia.

En la confusa y agitada atmósfera política de esos días era difícil percibir un principio ordenador de las diferencias políticas. Alrededor del gobierno interino se reagrupó una constelación de grupos y dirigentes que habían cuestionado el programa económico sustentado en la convertibilidad peso-dólar. Eran partidarios de recetas económicas basadas en la expansión del mercado interno y la sustitución de importaciones; la conversión en pesos nacionales de las gigantescas deudas asumidas en dólares por grandes empresarios fue la medida económica principal del período. La derecha neoliberal, partidaria de drásticos ajustes y nuevas restricciones al gasto público tenía en su ala más extrema a quienes propugnaban la dolarización como herramienta para restituir estabilidad. Ambas coaliciones carecían de articulación en torno a liderazgos indiscutidos; las aspiraciones de los principales referentes de ambos reagrupamientos a la presidencia incentivaban la fragmentación política.

La elección de abril de 2003 presentó un panorama de inédita dispersión partidaria. El Frepaso sufrió un proceso de fractura que lo llevó a una pronta desaparición; el partido de Cavallo, Acción para la República siguió un camino análogo. Mientras tanto, los dos grandes partidos se mostraron en lo más profundo de su crisis. El radicalismo conservó su unidad, después de una polémica elección interna que se dirimió en los estrados judiciales; su fórmula tocó un piso histórico con poco más de 2% de los votos. El justicialismo no pudo saldar sus diferencias internas; el congreso partidario hegemonizado por Duhalde maniobró para bloquear las elecciones internas y se autorizó la presentación de tres fórmulas presidenciales de ese origen que, en su composición y en el registro en el que desarrollaron la campaña, exhibieron la polaridad del antagonismo político e ideológico interno alcanzado por el movimiento. El peronismo atomizado y el radicalismo reducido a su mínima expresión electoral en su historia eran la cifra de la enorme crisis de la representación política argentina.

Con la renuncia de Menem a participar en el segundo turno electoral, Kirchner fue elegido presidente, después de obtener poco más de 22% de los votos en la primera vuelta. Ya en el gobierno, comenzó a adoptar una serie de iniciativas dirigidas a acumular poder, con el objetivo de compensar su visible debilidad de origen. Lo interesante, a los efectos de este trabajo, es que el nuevo presidente ensayó, de modo explícito, un nuevo proyecto de reconfiguración del sistema político.

Para Kirchner era necesario avanzar en la dirección de un sistema de partidos claramente estructurado en torno a dos coaliciones, de centroderecha y centroizquierda. El presupuesto que sostenía ese rumbo era el del debilitamiento terminal de las dos grandes fuerzas políticas de la Argentina durante la segunda mitad del siglo pasado. Era la herencia ideológica y programática de la gran explosión social de diciembre de 2001. Vale recordar que Kirchner había compartido con Elisa Carrí y Luis Zamora una iniciativa pública sobre la base del reclamo de la caducidad de todos los mandatos electivos, como forma de respuesta al reclamo popular de “que se vayan todos”.² Con el nuevo panorama de fragmentación partidaria que exhibían las últimas elecciones existían signos manifiestos de la crisis de los partidos. Por otro lado, es importante recordar que el presidente había empezado su ca-

rrera hacia la presidencia al frente de una coalición de centroizquierda, dispuesto a desarrollar su pretensión por fuera de la estructura justicialista. Fue producto de las azarosas contingencias de la interna justicialista que Duhalde –después de fracasar las tentativas para que fuera el ex gobernador santafesino Carlos Reutemann el candidato– lo propusiera para ser el candidato de su corriente que competiría para evitar que Menem ganara la elección.

Los primeros meses de gobierno le sirvieron a Kirchner para diseñar con hechos prácticos el perfil político-ideológico de su gestión y para definir el lugar que pretendía ocupar en el sistema de partidos que imaginaba. Su política de derechos humanos, la reestructuración de la Corte Suprema, la negociación de la deuda pública en default desde fines de 2001, una orientación económica productivista y una clara alineación con los gobiernos de matriz progresista que habían surgido en la región en los últimos tiempos señalaron el camino desde el cual intentaría construir una nueva coalición política.

La casi totalidad de ausencia de gestos dirigidos a subrayar su pertenencia justicialista y un activo diálogo político con Binner, Juez e Ibarra –cabezas todos ellos de gobiernos locales de inspiración progresista– delineaban lo que dio en llamarse la “transversalidad”, un modo equívoco de enunciar el armado de una nueva coalición. Sin embargo, desde el comienzo mismo de su gestión, Kirchner trabajó para disciplinar a gobernadores y legisladores justicialistas en el apoyo a sus políticas. Por otra parte las elecciones provinciales que se desarrollaron a lo largo del año 2003 pusieron de manifiesto que la crisis nacional de los dos grandes partidos no había alterado en lo fundamental el cuadro de la representación política en el plano subnacional: radicales y peronistas se repartieron una porción abrumadoramente mayoritaria en casi todos los distritos del país: el nivel de desagregación político-partidario no había llegado al grado que se suponía y había que contar con las estructuras nacionales para gobernar el país.

La operación de reformulación del sistema de partidos pareció alcanzar un punto de inflexión cuando en 2005 Kirchner decidió enfrentar a la estructura formal del PJ en la provincia de Buenos Aires, después de rechazar la propuesta de Duhalde para la distribución de la lista de candidatos. Con el triunfo de Cristina Kirchner sobre “Chiche” Duhalde por más de veinte puntos en la competencia por la senaduría nacional parecía afirmarse el liderazgo del presidente, en detrimento de la máquina tradicional del peronismo. Sin embargo, el triunfo –basado principalmente en la popularidad del matrimonio presidencial– no prescindió del apoyo de un conjunto de intendentes del conurbano bonaerense, expresión conspicua de la conformación de la estructura territorial clientelística del peronismo.

En la celebración pública del 25 de mayo de 2005, el presidente había lanzado una nueva fórmula, alternativa de la “transversalidad”, ya muy diluida a esas alturas: lanzó la “Concertación Plural”. La novedad principal consistía en una convocatoria a un sector del radicalismo con el que se venía avanzando en las conversaciones. Una vez más, se pretendía reformular el sistema de partidos; en este caso aprovechando el debilitamiento y la fragmentación política del radicalismo.

No puede dejar de ponerse de relieve el parecido de familia entre la convocatoria kirchnerista y el enunciado de Alfonsín en Parque Norte. Ciertamente existen diferencias entre ambas propuestas. Mientras Alfonsín enunciaba la necesidad de un acuerdo sobre un nuevo “proyecto de país” acerca del que se explayaba en profundidad y alrededor del cual convocaba a una imprecisa unidad en la que convergerían diferentes tradiciones políticas nacionales, Kirchner –prescindiendo de toda alusión programática– anunciaba un instrumento político que se insinuaba a esa altura más en la forma de una coalición electoral que de un movimiento nacional.

En contrapartida, la propuesta de Kirchner presentaba implícitamente un corte conceptual más claro del realineamiento político que se pretendía. Menos por su explicitación programática que por las políticas públicas puestas en marcha y por la retórica que las acompañaba –y a veces las superaba largamente– se ponía en escena una división política entre el nuevo rumbo neodesarrollista y las reformas de los años noventa a las que se responsabilizaba de la crisis y sus consecuencias sociales y se situaba en el lugar simbólico del “pasado”.

El choque entre ese proyecto de reestructuración del sistema político y las crudas necesidades de la administración, que incluían necesariamente un cuidado muy especial por conservar el acompañamiento del Partido Justicialista, marcaron la dinámica de un proceso de transformaciones impulsadas “desde arriba” (Godio, 2006). El partido de gobierno era el mismo partido que sostuvo el proceso de reformas neoliberales en su decisiva etapa de puesta en marcha y su estructura dirigencial era la misma que sustentó la transformación de ese partido en una fuerza centralmente sustentada en el clientelismo territorial. Esa dependencia y la compleja trama de prácticas políticas que conlleva colocó rápidamente un signo de interrogación sobre la suerte del desafío kirchnerista.

La elección de Cristina Kirchner en 2007 señaló la apertura de una etapa más compleja del proceso que se abrió en 2003. Precedida por meses de crecimiento de las tensiones sociales y políticas, la elección mostró de manera elocuente el mapa de las adhesiones políticas después de cuatro años de gobierno kirchnerista. La nueva presidente ganó apoyada en una cartografía electoral estructuralmente similar a la de los apoyos peronistas clásicos. Perdió en grandes conglomerados urbanos (Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba) y estableció lo principal de la diferencia a su favor en el conurbano bonaerense y en las provincias pobres del noroeste y noreste argentino.

Pocos meses después de la asunción de la nueva presidente, el largo conflicto con las organizaciones agrarias puso al país en un nivel poco habitual de tensión política. En su desarrollo apareció una vez más la batalla por la interpretación de la diferencia política en la Argentina. El gobierno procuró legitimar su acción y trazar la línea divisoria presentando sus iniciativas –en este caso la controvertida y finalmente rechazada en el Senado resolución 125 que establecía la movilidad de las retenciones al agro, en función del precio internacional de los granos– en términos de redistribución de la riqueza y fomento del proyecto de reindustrialización del país. Por su parte, la oposición discutió esas iniciativas sobre la base

de cuestionar los modos de ejercicio del gobierno a los que consideró inconsultos y autoritarios; esboza así un principio de división alternativo: el que separa al republicanismo y la ética por un lado y el decisionismo tendencialmente autoritario por otro.

En este contexto, la estrategia kirchnerista hacia la construcción de nuevas referencias políticas que reordenen el sistema de partidos políticos en Argentina ha quedado, por lo menos provisoriamente, paralizada. Así lo reconoció implícitamente el ex presidente cuando decidió encarar la normalización estatutaria del Partido Justicialista y ponerse al frente de su Consejo Superior. Hoy gran parte de las posibilidades de continuidad del liderazgo político kirchnerista se juega en el interior del territorio peronista y no en difusas “concertaciones” o “transversalidades”. Al mismo tiempo, la crisis agraria, y especialmente su desenlace, han devuelto al radicalismo un protagonismo central que había perdido desde diciembre de 2001. De manera que, entre las alternativas sistémicas previsible en un futuro inmediato, hay que ubicar la reaparición de una escena política reorganizada en torno no ya a dos grandes partidos, sino a las dos “familias políticas” de mayor arraigo en la cultura ciudadana: el peronismo y el radicalismo.

¿Significa lo anterior que Argentina va en camino de regreso hacia la estructuración del clivaje político que se conformó a mediados de la década del 40 del siglo pasado? Un retorno de esas características tendría requisitos que, en principio, parecen difíciles de reunir, como un grado de homogeneidad social en el mundo del trabajo y sus adyacencias populares, una propensión a la generación de grandes actores y culturas colectivas y un grado de simpleza en la gramática del conflicto social que hace tiempo han dejado de caracterizar a la sociedad argentina: la sociedad argentina ha alcanzado un grado de complejidad que puede considerarse irreversible. Al mismo tiempo, parece claro en estos días que las viejas discordias y las subculturas sociales que se formaron a su alrededor distan de ser reliquias del pasado inoperantes en el drama argentino actual. La política argentina se ha ido conformando en torno a liderazgos personales de amplia influencia en diversos sectores de la sociedad, a cuyo alrededor se disponen coaliciones cambiantes y débilmente cimentadas en términos programáticos. Al mismo tiempo la grave crisis capitalista financiera de alcance global renueva las condiciones para reagrupamientos políticos diferenciados en cuestiones fundamentales como el alcance de la intervención del Estado, el tipo de regulación pública sobre el funcionamiento de los mercados y las políticas activas de redistribución de la riqueza. En medio de la crisis mundial y la tensión permanente que atraviesa la política argentina no puede asegurarse que esas líneas divisorias sean las que finalmente terminen de organizar la lucha política en la Argentina.



Referencias

1. En diciembre de 1993, Menem y Alfonsín acordaron la convocatoria de una Asamblea Constituyente que habilitaría la reelección del presidente para un segundo período. Ante el riesgo de una crisis institucional, dada la decisión del menemismo de avanzar de cualquier forma hacia ese objetivo y enfrentado a una tensión del propio partido ante la cuestión, Alfonsín decidió firmar el acuerdo. El

pacto incluía una serie de reformas orientadas a atenuar el presidencialismo en el orden institucional argentino, eliminar el Colegio Electoral –con lo que se adoptaría el voto directo para la elección presidencial– e incorporar un senador más por cada provincia, entre otros cambios acordados.

2. A modo ilustrativo de esta iniciativa, ver el artículo periodístico “Carrió, Ibarra y Kirchner reclamarán juntos el cese de todos los mandatos”, en *La Nación*, 10 de julio de 2002.

Bibliografía

G. ABOY CARLÉS (2001), *Las dos fronteras de la democracia argentina: La reformulación de las identidades políticas de Afonsín a Menem*, Rosario, Homo Sapiens.

C. ALTAMIRANO (2004), *La lucha por la idea: el proyecto de la renovación peronista*, en M. NOVARO y V. PALERMO, *La historia reciente*, Buenos Aires, Edhasa.

C. ÁLVAREZ (1988), “Los desafíos del peronismo” en Revista *Unidos* N° 19, Buenos Aires, octubre.

A. ARMADA (1985), “Río Hondo, bueno para el reuma no para el cáncer”, en Revista *Unidos* N° 5, abril.

M. CALISE (2000), *Il partito personale*, Roma,-Bari, Laterza.

M. CAVAROZZI (1997), *Autoritarismo y democracia*, Buenos Aires, Ariel.

J. GODIO (2007), *El tiempo de Kirchner. El devenir de una “revolución desde arriba”*, Buenos Aires, Ed. Letra.

T. HALPERÍN DONGHI (1994), *La larga agonía de la Argentina peronista*, Buenos Aires, Ariel.

S. LEVITSKY (2003), *La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista, 1983-1999*, Buenos Aires, Siglo XXI.

S. LIPSET y S. ROKKAN (2000), “Estructuras de división, sistemas de partidos y alineamientos electorales”, en *Diez textos básicos de ciencia política*, Barcelona, Ariel.

P. MAIR (1997), *Party System changes, approaches and interpretations*, Oxford, Clarendon Press.

B. MANIN (1992), “Metamorfosis de la representación”, en *¿Qué queda de la representación política?*, Caracas, CLACSO, Nueva Sociedad.

J. MCGUIRE (1995), “Political parties and Democracy in Argentina”, en S. MAINWARING and T. SCULLI (eds.), *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, Stanford, Stanford University Press.

V. PALERMO y M. NOVARO (1997), *Política y poder en el gobierno de Menem*, Buenos Aires, Norma.

V. PALERMO (2002), “Un enemigo del pueblo”, en M. NOVARO, *El derrumbe político*, Buenos Aires, Norma.

A. PRZEWORZKI y M. WALLERSTEIN (1984), “El capitalismo democrático”, revista *Democracy*, julio de 1982, reproducido en *Punto de Vista*, número 34, julio-septiembre.

E. RINESI y G. NARDACCHIONE (2007), *Teoría y práctica de la democracia argentina*, en E. RINESI; G. NARDACCHIONE y G. VOMMARO, *Los lentes de Víctor Hugo*, Buenos Aires, Prometeo libros.

K. ROBERTS (2002), “El sistema de partidos y la transformación de la representación política en la era neoliberal latinoamericana”, en M. CAVAROZZI y J. M. ABAL MEDINA (h), *El asedio a la política*, Rosario, Homo Sapiens.

G. SARTORI (1992), *Partidos y sistemas de partidos*, Madrid, Alianza.

Recibido: 20/03/08. Aceptado: 08/04/08.